Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, celebrada el **tres de abril de dos mil veinticuatro**.

**VISTO** el expediente formado con motivo del Recurso Revisión **07442/INFOEM/IP/RR/2023**, promovido por **XXXX XXXXX XXXXXXXXXX**,a quienen lo sucesivo se le denominará **EL RECURRENTE**, en contra de la respuesta del **Poder Judicial,** que en lo sucesivo se denominará **EL SUJETO OBLIGADO[[1]](#footnote-2)**, se procede a dictar la presente resolución con base en lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

**I. De la Solicitud de Información.**

El **doce de octubre de dos mil veintitrés**, la persona solicitantetravés del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente **EL SAIMEX,** presentó ante **EL SUJETO OBLIGADO** la solicitud de acceso a la Información Pública, a la que se le asignó el número de expediente **01076/PJUDICI/IP/2023**, mediante la cual solicitó:

*“Solicito mediante este medio, el informe de prueba COVID-19, de la C. MARÍA DE LA LUZ RUIZ BELTRÁN, que su llamar se hace pasar por COORDINADORA DE ENLACE ACADÉMICO DE LA ESCULA JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ya que de la semana del 25 al 29 de septiembre del año en curso la servidora publica, sabiendo que tenia COVID se presentó a laborar, por ende genero un foco de infeccion dentro de los servidores públicos de la escuela judicail por su IRRESPONSABILIDAD DE NO RETIRARSE a su casa para resguardarce. PERO NO TODO ESTO TOLERADO POR EL C. JAIME LÓPEZ REYEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. YA que como es su protejida perosnal le permite TODO. Por ello solicito que la UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS, Me proprcione una lista en versión pública* *de las personas que se realizaron pruebas de COVID en el mes de septiembre de 2023. Así como el informe de la C. María de la Luz Ruiz Beltran, de su padeciemnto de COVID EN EL mes de septiembre de 2023" (Sic).*

**MODALIDAD DE ENTREGA:** Vía **SAIMEX**.

**II. Respuesta por parte del Sujeto Obligado.**

El  **veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés**, **EL SUJETO OBLIGADO** notificó la respuesta a la solicitud de Información Pública, en los términos siguientes:

*“…Se hace de su conocimiento que de conformidad con el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios cuenta con un plazo de 15 días hábiles posteriores a la notificación de la respuesta para interponer recurso de revisión...” (Sic)*

Advirtiendo que **EL SUJETO OBLIGADO** en dicha respuesta, adjuntó el documento electrónico denominado ***“RESPUESTA 1076-2023.pdf”,*** el cual contiene el oficio del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, por medio del cual el Titular de la Unidad de Transparencia, medular menciona que el proporcionar los nombres, así como el informe de la prueba de Covid-19, vulnera en todos los aspectos la privacidad, así como la confidencialidad del estado de salud de dicha servidora pública, pues tal como lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del Expediente Clínico, es el reconocimiento de la titularidad del paciente sobre los datos que proporciona al personal del área de la salud, por lo que, se han considerado aquellos datos que se refieren a su identidad personal y los que proporciona en relación con su padecimiento; a todos ellos, se les considera información confidencial. No se omite mencionar que, los datos personales de los servidores y las servidoras públicas que pertenecen a un grupo vulnerable o han dado positivo a Covid-19 y cumplieron su periodo de aislamiento, fueron clasificados por el Comité de Transparencia institucional mediante Sesión Extraordinaria 12/21, la cual puede ser consultada en el link <https://www.pjedomex.gob.mx/transparencia/8_actas_comite>.

**III. De la presentación del Recurso Revisión.**

**EL RECURRENTE** inconforme con la respuesta proporcionada por **EL SUJETO OBLIGADO**, el **veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés** interpuso el Recurso Revisión el cual fue registrado en **EL SAIMEX,** y se le asignó el número de expediente anotado en el rubro**,** en el que señaló los siguientes agravios:

**Acto impugnado:**

*“respuesta de la solicitud" (Sic).*

**Razones o motivos de inconformidad:**

*“solicite el listado en versión publica de los personas que realizarón pruebas de covid en la Unidad de servicios medicos de la escuela judicial, ya que es infomación que forma parte de una estadistica informativa, aunado que lo solite en versión publica, si furra el caso se me hubiera proporcionado la numeralía de hombre y mujer." (Sic).*

**IV. Del turno del Recurso Revisión.**

El **veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés**, el medio de impugnación que se trata se envió electrónicamente al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios; por lo que, con fundamento en el artículo 185, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se turnó mediante **EL SAIMEX**, a la **Comisionada** **Sharon Cristina Morales Martínez** a efecto de decretar su admisión o desechamiento.

**a) Admisión del Recurso Revisión.**

El **veintisiete de octubre de dos mil veintitrés**, se notificó la admisión a trámite del Recurso Revisión que nos ocupa; así como la integración del expediente respectivo, mismo que se puso a disposición de las partes, para que en un plazo máximo de siete días hábiles conforme a lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; **EL RECURRENTE** manifestara lo que a su derecho conviniera, a efecto de presentar pruebas o alegatos y, en su caso, **EL SUJETO OBLIGADO** rinda su Informe Justificado.

**b) Informe Justificado y Manifestaciones.**

En cumplimiento a lo anterior, de las constancias del expediente electrónico del **SAIMEX**, se advierte que el **dieciocho de enero de dos mil veinticuatro**, **EL SUJETO OBLIGADO** envió mediante Informe Justificado, los archivos electrónicos que a continuación se describen:

* ***INFORME JUSTIFICADO 7442-2023.pdf***: Oficio del dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, por medio del cual el Titular de la Unidad de Transparencia, adjunta el listado del reporte de pruebas COVID realizadas en la Unidad de Servicios Médicos del mes de septiembre del 2023; además los datos personales contenidos en el listado, fueron clasificados como confidenciales por el Comité de Transparencia Institucional en la Sesión Extraordinaria 24-2023, la cual se podrá consultar <https://www.pjedomex.gob.mx/transparencia/8_actas_comite>.
* ***Anexo 1.pdf***: Listado del reporte de pruebas COVID realizadas en la Unidad de Servicios Médicos del mes de septiembre del 2023.

Cabe destacar que dichos archivos fueron puestos a disposición del **RECURRENTE** los dias **catorce de marzo de dos mil veinticuatro**, por actualizar lo previsto en el artículo 185, fracción III de la Ley de la materia.

Por su parte, el particular no realizó manifestación alguna, ni presentó pruebas o alegatos.

**c) Ampliación del plazo para resolver el Recurso de Revisión**

El **dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés**, se acordó ampliar por un periodo de quince días hábiles, el plazo para resolver el Recursos de Revisión que nos ocupa; acto que fue notificado a las partes, mediante el SAIMEX.

Este Organismo Garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos dentro del primer semestre del año dos mil veintidós, que, en comparación con los recibidos el año dos mil veintiuno, se ha incrementado aproximadamente un 400%, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

1. Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
2. Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.
3. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
4. La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.”* consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”,* visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**d) Cierre de Instrucción.**

Una vez analizado el estado procesal que guarda el expediente, el **dos de abril de dos mil veinticuatro**, la **Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez** acordó el cierre de instrucción; así como, la remisión del mismo a efecto de ser resuelto, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 fracciones VI y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CONSIDERANDOS**

**PRIMERO.** **Competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios es competente para conocer y resolver el presente Recurso Revisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; ordinal 2, fracción II, 13, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. Interés.**

El Recurso Revisión fue interpuesto por parte legítima, en atención a que se presentó por **EL RECURRENTE,** quien es la misma persona que formuló la solicitud de acceso a la Información Pública al **SUJETO OBLIGADO,** pues para ello, es necesario que el particular ingrese al **SAIMEX** mediante la utilización de su clave de usuario y contraseña.

**TERCERO. Oportunidad.**

El Recurso de Revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que **EL RECURRENTE** tuvo conocimiento de la respuesta impugnada; tal y como, lo prevé el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece:

***“Artículo 178****. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, Recurso de Revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta.*

*A falta de respuesta del sujeto obligado, dentro de los plazos establecidos en esta Ley, a una solicitud de Acceso a la Información Pública el recurso podrá ser interpuesto en cualquier momento, acompañado con el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud.*

*En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el Recurso de Revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.”*

En esa tesitura, atendiendo a que **EL SUJETO OBLIGADO** notificó la respuesta a la solicitud de Acceso a la Información Pública el día **veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés**, así, el plazo de quince días hábiles que el artículo 178 de la Ley de la materia otorga al hoy **RECURRENTE** para presentar el respectivo Recurso de Revisión, transcurrió del **veinticinco de octubre al quince de noviembre de dos mil veintitrés**, sin contemplar en el cómputo los días sábados y domingos, considerados como días inhábiles, en términos del artículo 3, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En ese tenor, si el Recurso de Revisión que nos ocupa, se presentó el día **veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés** este se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en el citado precepto legal y, por tanto, se considera oportuno.

**CUARTO. Procedibilidad.**

Este Instituto considera importante precisar que conforme al artículo 180, fracción II, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que prevé cuando las solicitudes se presenten de manera electrónica no es requisito indispensable el proporcionar el nombre, tal como se muestra a continuación:

***“Artículo 180.*** *Los Recursos de revisión contendrá:*

***…***

***II. El nombre del solicitante que recurre*** *o de su representante y, en su caso…*

***En caso de que los Recursos se interponga de manera electrónica no será indispensable que contengan los requisitos establecidos en las fracciones II****, IV, VII y VIII.****”***

*(Énfasis añadido)*

Por lo que, derivado que los Recursos de Revisión materia del presente asunto, se interpuso de manera electrónica, no es necesario que contenga determinados requisitos, entre ellos, el nombre del **RECURRENTE;** por lo que, en el presente caso, al haber sido presentados los Recursos de Revisión vía **SAIMEX**, dicho requisito resulta innecesario.

Lo anterior es así, pues el artículo 15 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios prevé que, toda persona tendrá acceso a la información sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, de lo que se infiere que para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, **el nombre no es un requisito *sine qua non[[2]](#footnote-3)*** para que los particulares ejerzan el derecho de acceso a la información pública, pues por el contrario la Ley de la materia prevé en su artículo 155, párrafo segundo la posibilidad de que las solicitudes de información sean anónimas, al utilizar un nombre incompleto o, inclusive un seudónimo.

Aunado a lo anterior, cabe precisar que los artículos 6, Apartado A, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones I, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, garantizan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, toda vez que disponen que toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública.

Asimismo, se estima que el requisito relativo al nombre del **RECURRENTE** no constituye un supuesto indispensable de procedibilidad de los Recursos Revisión, en términos de los artículos 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1 párrafos segundo y tercero, 6 apartado A, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, párrafo vigésimo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, debido a que el acceso a la información pública es un Derecho Humano que no requiere legitimación en la causa, sino que únicamente basta con que se encuentre legitimado en el procedimiento de Recursos de Revisión, circunstancia que se acredita en las constancias electrónicas del expediente, de las que se desprende que **EL RECURRENTE** es la misma persona que realizó las solicitudes de acceso a la información pública que ahora se impugnan.

Es así que, para el estudio de la materia sobre la que se resuelve los presentes Recursos de Revisión, resulta intrascendente conocer el nombre de la persona que lo hubiere promovido, en virtud de que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, reconocen la prerrogativa de los individuos para que no resulte necesario la acreditación de un interés o justificar la utilización de la información; siendo ocioso realizar dicho análisis; toda vez que, se limitaría el ejercicio de un Derecho Humano, como el Derecho de Acceso a la Información Pública, por una cuestión procedimental.

**QUINTO. Estudio y análisis del asunto.**

Con la finalidad de estar en posibilidad de dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, el presente estudio se basará en el contenido íntegro de las actuaciones que del expediente electrónico que obra en **EL SAIMEX**, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y respetando en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y demás leyes aplicables en la materia; así como en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.

En ese tenor, para un mejor estudio y comprensión del asunto que se resuelve, es preciso recordar que, **EL RECURRENTE** requirió del **SUJETO OBLIGADO**, lo siguiente:

* **El informe de prueba COVID-19, de la servidora pública mencionada en la solicitud de acceso.**
* **Solicito a la Unidad De Servicios Médicos, una lista en versión pública de las personas que se realizaron pruebas de COVID en el mes de septiembre de 2023.**

**EL SUJETO OBLIGADO** en atención a la solicitud de acceso dio respuesta a través del Titular de la Unidad de Transparencia, menciona que el proporcionar los nombres, así como el informe de la prueba de Covid-19 vulnera en todos los aspectos el estado de salud de la servidora pública, pues tal como lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012. No se omite mencionar que, los datos personales de los servidores y las servidoras públicas que pertenecen a un grupo vulnerable o han dado positivo a Covid-19 y cumplieron su periodo de aislamiento, fueron clasificados por el Comité de Transparencia institucional mediante Sesión Extraordinaria 12/21, constable en la liga electrónica <https://www.pjedomex.gob.mx/transparencia/8_actas_comite>.

Posteriormente, el particular inconforme con la respuesta proporcionada por **EL SUJETO OBLIGADO**, presentó el recurso de revisión manifestando que solicito el listado en versión pública de las personas que se realizaron las pruebas de COVID-19 en la Unidad de Servicios Médicos de la Escuela Judicial, la información que forma parte de una estadística informativa, aunado que lo solicito en versión pública.

Se debe agregar también que, conforme a los agravios manifestados por el particular no expresó inconformidad que pudiera combatir la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** correspondiente **al informe de prueba COVID-19 de la servidora pública mencionada en la solicitud de acceso.** A causa de ello, este Órgano Garante considera que este punto debedeclararse consentido, ante la falta de impugnación en específico, pues se entiende que **EL RECURRENTE** ésta conforme con la información entregada.  Por lo tanto, no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado, ya que se infiere su consentimiento ante la falta de impugnación eficaz.

Sirve de sustento por analogía las tesis jurisprudenciales con números VI.3o.C. J/60 y 3ª./J.7/91, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo los números de registros electrónicos 176608[[3]](#footnote-4) y 174177[[4]](#footnote-5), que a la letra dice:

***“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que, si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.*

***“REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.*** *Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.”*

Acto seguido, abierta la etapa de instrucción, **EL RECURRENTE** no realizó manifestaciones, alegatos o pruebas. Por su parte **EL SUJETO OBLIGADO** rindió su Informe Justificado, proporciona un listado en versión pública del reporte de pruebas COVID realizadas en la Unidad de Servicios Médicos del mes de septiembre del 2023, los datos contenidos en el listados fueron clasificados como confidenciales por el Comité de Transparencia Institucional en la Sesión Extraordinaria 24-2023, la cual se podrá consultar <https://www.pjedomex.gob.mx/transparencia/8_actas_comite>.

Analizadas de las constancias que obran en el **SAIMEX**, se realiza el siguiente análisis de Derecho y hecho que se expone:

Al respecto, este Órgano Garante advierte que el estudio del presente asunto versara en las inconformidades que el particular manifestó y derivan que no se le entregó el listado en versión pública de las personas que se realizaron las pruebas de COVID-19 en la Unidad de Servicios Médicos de la Escuela Judicial. Ante tal inconformidad que realizo el particular se advierte que **EL SUJETO OBLIGADO** en el Informe Justificado hizo entrega de un reporte de pruebas COVID-19 realizadas en la Unidad de Servicios Médicos del mes de septiembre de 2023, tal y como se advierte a manera de ejemplo en las siguiente imagen:



Una vez descritas las constancias que obran el SAIMEX, se procede a realizar el siguiente análisis conforme a Derecho y Hecho:

Recordemos que, **EL SUJETO OBLIGADO** hizo entrega de un reporte que cumple con las características solicitadas por el particular, precisando que el nombre, el número de empleado y los síntomas del personal que se realizó la prueba COVID-19, fueron testados.

Ahora bien, respecto de los datos testados correspondientes a los nombres de servidores públicos, número de empleado, es necesario precisar que si bien dicho dato corresponde a información pública; lo cierto es que para el caso que nos ocupa, dicho dato debe ser considerado confidencial al igual que los síntomas del personal que dieron positivo o negativos al contagio del virus COVID-19, pues causaría una afectación a la esfera más íntima de su titular. La utilización indebida del nombre y síntomas pueden dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Tan es así, que conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 “Del Expediente Clínico”[[5]](#footnote-6), dentro las generalidades establecen que los datos proporcionados por las personas que reciben una atención deben ser confidenciales. Para mayor referencia, se inserta el siguiente texto:

***“5 Generalidades***

***(…)***

*5.4 Los expedientes clínicos son propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos que los genera, cuando éste, no dependa de una institución. En caso de instituciones del sector público, además de lo establecido en esta norma, deberán observar las disposiciones que en la materia estén vigentes. Sin perjuicio de lo anterior,* ***el paciente en tanto aportante de la información y beneficiario de la atención médica, tiene derechos de titularidad sobre la información para la protección de su salud, así como para la protección de la confidencialidad de sus datos****, en los términos de esta norma y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.”*

De tales circunstancias y toda vez que **EL SUJETO OBLIGADO** testó de manera correcta el nombre, número de empleado y síntomas de conformidad con los párrafos anteriores. Sin embargo, al dicho del **SUJETO OBLIGADO** menciona que el Acta puede ser consultada en la dirección electrónica: <https://www.pjedomex.gob.mx/transparencia/8_actas_comite>.

Por consiguiente, este Órgano Garante advierte que, **EL SUJETO OBLIGADO** no entregó los pasos a seguir para acceder a la información al respecto, debemos partir de que la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el solicitante tenga a su disposición la información requerida, o cuando realice su consulta en el lugar que ésta se localice, conforme a los artículos 3, fracción XI, XII 4, 12, y 24, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, antes insertos, así como lo que establecen los 11 y 161, del mismo ordenamiento referido, en el que señalan diversas características que debe tener la información desde el momento de su generación, publicación y entrega, así como la forma en que se deberá consultar la información, señalando una fuente precisa y concreta, a saber:

*“Artículo 11. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, actualizada, completa, congruente, confiable, verificable, veraz, integral, oportuna y expedita, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberá estar definido y ser además legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática, por lo que atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.*

*[…]*

*Artículo 161. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días hábiles. La fuente deberá ser precisa y concreta y no debe implicar que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que se encuentre disponible.” (Sic)*

En ese sentido, es toral señalar que el derecho de acceso a la información pública, implica que cualquier persona conozca la información contenida en los documentos que se encuentren en los archivos de los Sujetos Obligados, así que cuando la información requerida esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días hábiles, siendo trascendental que la fuente sea precisa y concreta, por lo que no debe implicar que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que se encuentre disponible.

 De los artículos transcritos se establecen las características que debe tener la información desde el momento de su generación, publicación y entrega; de igual manera se contempla el procedimiento a seguir por **EL SUJETO OBLIGADO** para informar a los solicitantes sobre información que se encuentre disponible en libros, compendios, formatos electrónicos, entre otros, haciéndole saber al solicitante como podrá consultar, reproducir o adquirir la información, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, comprendiendo:

1. La fuente
2. El lugar y
3. La forma

Asimismo, se establece que la fuente de la información deberá ser:

1. Precisa
2. Concreta
3. Y NO debe implicar que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que se encuentre disponible.

De lo anterior, se desprende que la Ley de Transparencia constriñe a los Sujetos Obligados a atender las solicitudes de información y los faculta para que en el caso de que la misma, ya se encuentre disponible a través de una determinada página de internet; a que dicho pronunciamiento se le deba hacer en los términos descritos, circunstancia que en la especie no aconteció así, toda vez que del portal al que remite no es posible identificar la información por lo que no se atiende en los términos respectivos y requeridos por el solicitante.

Aunado de que, este Instituto realizó la búsqueda en la liga electrónica proporcionada, respecto al acta 24/2023 en el apartado de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del ejercicio fiscal 2023, advirtiendo que no se encuentra el acta mencionado por **EL SUJETO OBLIGADO**. Es por ello, que para poder cumplir con el Derecho de Acceso a la Información pública se debe de entregar el Acuerdo de clasificación como información confidencial respecto a los registros de las pruebas COVID-19 remitidos en Informe Justificado, en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132, fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como los numerales Segundo, fracción XVIII, y del Cuarto al Décimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas.

Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 186, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se determina **MODIFICAR** la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** y ordenar la entrega de la información en los términos descritos en el cuerpo de la resolución del recurso de revisión que nos ocupa.

Así, con fundamento en lo previsto en los artículos 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 181, 185 fracción I, 186 y 188 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**R E S U E L V E**

**PRIMERO**. Resultan **fundadas** las razones o motivos de inconformidad planteadas por **EL RECURRENTE**, en términos del Considerando **QUINTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO**. Se **MODIFICA** la respuesta que origino el Recurso de Revisión **07442/INFOEM/IP/RR/2023,** en términos del considerando **QUINTO** de la presente resolución, se **ORDENA** al **SUJETO OBLIGADO** entregar al **RECURRENTE,** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, lo siguiente:

*El Acuerdo de Clasificación emitido el Comité de Transparencia con motivo de la versión pública, respecto al registro de pruebas Covid-19 remitido en el Informe Justificado.*

**TERCERO. NOTIFÍQUESE** vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, y se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** **Notifíquese** al **RECURRENTE** la presente resolución vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **SAIMEX**.

**QUINTO.** **Hágase** **del conocimiento** del **RECURRENTE**, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, podrá impugnarla vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

**SEXTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

SCMM/AGZ/DEMF/CCC

1. “***Artículo 3****. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: (…)* ***XLI. Sujetos obligados:*** *Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídico colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, que deba cumplir con las obligaciones previstas en la presente Ley; (* [↑](#footnote-ref-2)
2. No es un requisito **indispensable**. [↑](#footnote-ref-3)
3. [*https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176608*](https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176608) [↑](#footnote-ref-4)
4. [*https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/174177*](https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/174177) [↑](#footnote-ref-5)
5. <https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787> [↑](#footnote-ref-6)